



Poder sin legitimidad

SUDEBIP

El Gobierno se aferra a su poder, dejarlo sería renunciar a los beneficios que este le ha generado a la cúpula que lo controla. Mientras tanto, la población sigue padeciendo una crisis que agota sus posibilidades y esperanzas

Nicolás Maduro asumió el 10 de enero un nuevo período presidencial que culmina en el 2025. La llegada a esa fecha estuvo cargada de polémica debido a que las elecciones celebradas en mayo de 2018, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como vencedor, fueron cuestionadas por sus significativas y evidentes irregularidades que enturbiaron el proceso y llevaron a considerarlas, por la oposición y un nutrido grupo de países, como fraudulentas.

El acto de juramentación de Maduro se realizó ante el Tribunal Supremo de Justicia y no frente a la Asamblea Nacional (AN), órgano representante de la voluntad popular, debido a que el Gobierno insiste en que esta se encuentra en “desacato”. Se trató de una artimaña más

que sigue negando las elecciones celebradas en diciembre de 2015 y desconoce la decisión de los electores, quienes eligieron en su momento a una AN mayoritariamente opositora. En dicho acto solamente hizo presencia una parte del país, aquella que está con el Gobierno. Por otra parte, únicamente asistieron cuatro presidentes de países latinoamericanos: Cuba, Bolivia, Nicaragua y El Salvador; los únicos mandatarios procedentes de fuera del continente americano fueron los presidentes de Osetia del Sur, Anatoli Bibílov, y de Abjasia, Raul Khajimba, dos países no reconocidos por la ONU; también asistieron representantes por parte de otros países como México, Rusia, Uruguay, China, Irán, Turquía y algunos del continente africano. No obstante,

los grandes ausentes fueron los países que forman parte del Grupo de Lima, los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea y los Estados Unidos.

En este sentido, Maduro asumió un nuevo período presidencial, pero visto los antecedentes y el proceso que lo ha llevado a este punto, se hace evidente que faltan sustentos que le otorguen una legitimidad de origen suficiente como para construir un gobierno dentro del marco del Estado de derecho, por ello a Maduro se le está calificando de presidente de facto y usurpador del poder.

EL DETRÁS DE CÁMARA DE LA REVOLUCIÓN

El Gobierno ha hecho del “socialismo” su bandera ideológica y en su discurso argumenta que su sentido y fin es la atención a las clases más desposeídas y la lucha contra las estructuras “imperialistas” y “opresoras”. No obstante, los discursos se han ido esfumando y la pretendida ideologización sucumbe ante una realidad que se impone y es imposible ocultar: la corrupción. Esta ha permitido que el chavismo genere una nueva clase económico-social dominante que controla y administra un entramado complicado de negocios, empresas y sectores, recibiendo cuantiosos beneficios, todo a costa de sobornos, contratos millonarios con el Estado y manejo fraudulento del control cambiario.

A finales del año 2018 cobró notoriedad el nombre de Alejandro Andrade, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera público que en diciembre del año 2017 este se declaró culpable de lavado de dinero por un valor de US\$ 1.000 millones. Andrade fue, durante la campaña electoral por las presidenciales de 1998, guardaespaldas del expresidente Chávez; ocupó posteriormente el cargo de secretario privado del presidente, así como diferentes cargos relacionados al

mundo financiero hasta llegar a ser nombrado tesorero nacional (2007-2010) y presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (2008-2010). Admitió haber utilizado sus influencias como tesorero nacional para otorgar divisas preferenciales a un grupo de empresarios a cambio de cuantiosos beneficios.

Andrade tejó una red con la complicidad de banqueros y corredores de bolsa, a nivel nacional e internacional, que le permitió la manipulación financiera de los papeles del Estado, notas estructuradas y bonos de la deuda externa de Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorrusia, adquiridas por el gobierno bolivariano. Actualmente vive en Miami y está colaborando abiertamente con las autoridades norteamericanas.

El caso de Andrade ha despertado una olla de corrupción millonaria que ha supuesto un escándalo público. Esto sucede en un momento en que Venezuela está sumida en una crisis económica, política y social sin precedentes. Entre los casos más sonados de empresarios vinculados a este saqueo a la nación se encuentra el de Raúl Gorrín, dueño de la aseguradora La Vitalicia y, desde el año 2013, del canal de noticias *Globovisión*. Gorrín está acusado por las autoridades de Estados Unidos de haber pagado presuntamente unos US\$159 millo-

nes en sobornos a dos ex altos funcionarios venezolanos, entre ellos Andrade, y haberles ayudado a lavar esos fondos ilícitos.

El gobierno de los Estados Unidos sancionó a Raúl Gorrín y a sus empresas, incluida *Globovisión*, que pasan ahora a engrosar el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y restringió a sus ciudadanos y empresas para establecer relaciones con las empresas de Gorrín. Por su parte, Alejandro Andrade fue condenado a diez años de prisión por corrupción y sus bienes, entre los que destacan inmuebles, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias en Estados Unidos y Suiza, fueron confiscados.

A la sombra de la revolución se ha tejido una red de corrupción en la que están implicados cientos de personas que directamente se han beneficiado. Las denuncias no son nuevas, Andrade y Gorrín son una mínima parte de todo este entramado que ha generado cuantiosos dividendos para la “boliburguesía”, a expensas de la gran mayoría del pueblo venezolano.

LETARGO ELECTORAL

Las elecciones para elegir a los nuevos concejales pasaron prácticamente desapercibidas. El 9 de diciembre fue la fecha elegida por el CNE para realizar estos comicios en los que se elegirían a 2.459 concejales en-



SOBERANIAVENEZUELA.ORG

tre los diferentes concejos municipales a nivel nacional. Los resultados mostraron el poco interés del electorado por este proceso. Según el CNE la participación fue de 27,4 %, por lo que la abstención superó el 72 %. La campaña electoral de estos comicios fue escasa; de hecho, los partidos opositores se limitaron a llamar a la no participación, además de encontrarse en su mayoría inhabilitados y sin candidatos debido a las sanciones que les ha impuesto el Gobierno. El resultado, más allá de la abstención, fue el esperado. El PSUV se llevó la mayoría de los votos, quedando la oposición únicamente con el control de diez concejos municipales.

EL NACIONAL SIN CIRCULACIÓN

El diario *El Nacional*, referencia del periodismo venezolano, con 75 años de circulación en el país, suspendió la publicación de su versión impresa el pasado mes de diciembre, debido a la falta de papel, insumo que solo lo suministra el Estado venezolano a través de la Corporación Alfredo Maneiro. *El Nacional* se ha convertido en el medio impreso número 66 que deja de circular de manera temporal o definitiva desde 2013. El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS) ha reseñado que hace cinco años existían por lo menos noventa medios impresos en veinte estados del país. En la actualidad llegan a veintisiete. La caída ha sido del 68 %.



PERIÓDICO DIGITAL EL LIBERAL

DESDE LA ASAMBLEA NACIONAL

Desde principios de enero la AN, que se encuentra inconstitucionalmente despojada de sus atribuciones, está presidida por Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular. La llegada de Guaidó es producto del acuerdo con el *sistema de turnos* pactado por la oposición desde el año 2016. Además, coincidió con el tiempo en que Maduro iba a juramentarse como presidente de la República.

En una concentración opositora que denominaron “Cabildo Abierto”, Guaidó hizo un llamado al pueblo venezolano, a la Fuerza Armada Nacional y a la comunidad internacional, a secundar los esfuerzos de la AN para sacar del poder a Nicolás Maduro. Pero también, y fue lo que generó más polémica en medio del discurso, afirmó que apejándose a la Constitución asumiría “las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República...”, una declaración que generó confusiones y diversas interpretaciones que no se aclararon y en muchos casos señalaban que Guaidó se había proclamado como “Presidente interino”. Todo ello sumó e hizo que la imagen del joven presidente de la AN se convirtiera en una incipiente referencia en medio de una oposición que lleva más de un año sin un liderazgo claro, absolutamente desarticulada y dividida.

La imagen siguió adquiriendo relevancia cuando circuló un video por las redes sociales donde se podía apreciar que supuestos miembros de la policía política lo detenían y bajaban a la fuerza de su vehículo en la autopista Caracas-La Guaira. La detención arbitraria de Guaidó se convirtió de inmediato en una noticia ampliamente reseñada en redes sociales venezolanas y medios internacionales. Poco después fue liberado y según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, se trató de un acto unilateral que cometieron unos cuatro

funcionarios que están siendo investigados y fueron suspendidos de sus cargos.

SIGUE EL CUENTO DE LOS SABOTAJES

El descaro gubernamental frente a las crisis que se suceden en diversos ámbitos de los servicios públicos no parece tener fin y solamente tiene al “sabotaje” como culpable del colapso. Recientemente circuló por redes sociales la denuncia por la muerte de al menos dos pacientes en el Hospital Universitario de Caracas debido a fallas eléctricas. Al respecto, el ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, declaró en primera instancia que se trató de una “falla interna” del hospital. Luego, manifestó que se trató de un sabotaje. No obstante, trabajadores del lugar denunciaron que las plantas tenían al menos tres meses sin funcionar.

NUEVOS ANUNCIOS

En su memoria y cuenta Maduro anunció el aumento del salario mínimo en un 300 %. En nuestra economía hiperinflacionaria, este es el primer aumento del año y, desde ya, es incapaz de comprar ni una tercera parte de la canasta básica alimentaria.